

La ideología como obstáculo a la alternancia democrática en Venezuela

HUMBERTO GARCÍA LARRALDE*

pp. 1-36

Resumen

Este artículo examina la importancia que tiene la ideología en el mantenimiento en el poder del gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de su deficiente gestión y rechazo mayoritario. Comienza mirando aspectos que cautivaron la militancia en el movimiento comunista que, junto a la prédica original del chavismo, conformaron un ideario legitimador de la llamada Revolución Bolivariana y de su apego al poder. Emerge una visión del país como propiedad del chavismo que, junto al desmantelamiento del Estado de Derecho y el arrinconamiento del mercado, permitió apropiarse de manera excluyente de los poderes públicos para implantar un régimen de expoliación. Bajo una prédica «socialista» se fue conformando un estado patrimonialista, en la acepción de Max Weber, en el que destaca el protagonismo de la dirigencia militar. La ideología obra en todo esto como una impostura que sirve, no para ganar adeptos, sino como instrumento de una «guerra» por otros medios contra los detractores de la «revolución». Ello evoca la «banalidad del mal», figura acuñada por Hannah Arendt para abordar los horrores cometidos por el nazi Adolf Eichmann. Culmina el artículo con unas breves conclusiones.

Palabras clave

Ideología / Revolución / Chavismo / Miitaires

Abstract

This article examines the role ideology has played in maintaining the government of Nicolás Maduro in power, despite its deficient performance, rejected by most Venezuelans. It begins surveying aspects that captivated interest in communist militancy which, together with chavismo's original proclamations, helped legitimize the so-called Bolivarian Revolution and its claim to power. What emerges is a view of Venezuela as pertaining to chavismo. Together with the dismantling of the rule of law and the cornering of the market, it allowed for the appropriation of state powers to install a regime of pillage. Covered in socialist rhetoric, a patrimonial state, in the meaning given by Max Weber, came into being, in which the prominence of the military leadership is notorious. Ideology has served in all this as an imposture, not to win adherents, but as an instrument of «war» by other means against those opposing the «revolution». This evokes the «banality of evil», term coined by Hannah Arendt regarding the horrors committed by the nazi, Adolph Eichmann. The article ends with a few brief conclusions.

Key words

Ideology / Revolution / Chavismo / Military

* Economista, Doctor en Estudios del Desarrollo por el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Profesor investigador jubilado de esta institución. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Correo-e: humgarl@gmail.com

Introducción

La tenacidad con que Nicolás Maduro y su equipo se han aferrado al poder, ajenos al rechazo abrumador de los venezolanos a su gestión de gobierno y desafiando su condición minoritaria, es alarmante. Cuando se ha puesto fehacientemente de manifiesto la inviabilidad de su conducción de la economía y el severo empobrecimiento de la población evidencia dramáticamente su fracaso —con sus secuelas de hambre, enfermedades y muertes evitables—, el Presidente exhibe una inexcusable crueldad negándose a rectificar sus políticas. Lejos de asumir una actitud conciliadora, revisar sus actuaciones y buscar consensos para atender la tragedia que sufren los venezolanos, intensifica su enfrentamiento con las fuerzas de oposición. A pesar de que estas dominan la Asamblea Nacional, infringe la Constitución abiertamente, desconociendo sus atribuciones, para concentrarlas en organismos irritos, sujetos a los dictados del Ejecutivo. La negativa a reconocer la legitimidad del adversario y a entablar conversaciones sinceras a partir de las cuales arribar a acuerdos sobre cómo superar la situación presente, inquietan sobremanera, ya que cierra las posibilidades de solución pacífica y constitucional a la grave situación actual del país. Hace prever, además, que no aceptará su eventual salida del poder. Es menester, por ende, intentar una explicación de tal comportamiento para tomar las previsiones que permitan aumentar las posibilidades de éxito de un cambio pacífico.

La economía política y la ideología como explicación

La explicación lógica de la intransigencia del presidente Maduro y de su equipo reside en los poderosos intereses articulados en torno a las inusitadas oportunidades de lucro que ha deparado el arrinconamiento del mercado como mecanismo para asignar recursos y canalizar la satisfacción de demandas, la ausencia de transparencia y la no rendición de cuentas de la gestión de dineros públicos, y su reemplazo por un sistema extendido de regulación y control sujeto a la discrecionalidad de funcionarios y militares. Junto al disfrute arbitrario de privilegios de todo orden, gracias al desmantelamiento del Estado de Derecho, ha tenido lugar la conformación de una nueva oligarquía, militar y civil que usufructúa el producto social, amparada en relaciones de poder, propio de un régimen de explotación. Un análisis desde la óptica de la economía política sugiere que, en defensa de estos intereses pecuniarios, es racional que el Madurismo cierre filas en torno a la perpetuación del orden establecido. No es osado aseverar que el tren de vida derivado del disfrute de estas posiciones de poder, o de las fortunas asociadas, jamás hubiera estado al alcance de muchos de estos funcionarios —en particular de los que ocupan los cargos del más alto nivel—, de observarse rigurosamente los estatutos que regulan el servicio público, como los demás procedimientos y garantías del orden jurídico aun formalmente vigente. De manera que la explicación clásica de una oligarquía que oprime a la población para

defender sus privilegios es central al entendimiento de la conducta contumaz de quienes hoy detentan el poder.

Sin desmerecer lo anterior, en este escrito se defiende la idea de que la virulencia con que esta oligarquía defiende su poder obedece también a una fuerte impronta ideológica. Como ideología entenderemos una representación simplificada y sesgada del mundo que sirve para favorecer o promover el dominio político de determinado grupo o grupos social(es).¹ En el caso de regímenes de naturaleza neofascista como puede definirse el actual,² la ideología ocupa una posición central como instrumento de dominación. A diferencia del comunismo, ello no se deriva de que el fascismo tenga base doctrinaria. Ni siquiera en su acepción más restringida, referida exclusivamente a los partidarios de Mussolini en Italia, es posible discernir un cuerpo teórico coherente y consistente como sustento legitimador (Eco, 1995). Pero en su designación genérica, siguiendo a Payne (1997), el fascismo se identifica con construcciones ideológicas basadas en mitos fundacionales acerca de los orígenes del «Pueblo» en cada país, que sirvieron para delinear sus rasgos definitorios, basados en la sangre y la tierra. Ello inspiró posturas patrioterías que incitaban a recrear las condiciones que habrían forjado sus supuestas fortalezas y virtudes originarias. Se invocan epopeyas de un pasado glorioso para instigar la conquista de un futuro providencial en el cual el pueblo recuperaría la grandeza de su época de oro. Apelando a simbolismos maniqueos que manipulan miedos ancestrales, el fascismo alimenta el resentimiento contra supuestos enemigos de la Patria, quienes amenazarían la ascendencia que, en su mitología, se atribuían tener sobre ellos, desatando la confrontación violenta en su contra.

Lo novedoso del caso venezolano está en el sincretismo de mitos patrioterías con los del movimiento comunista —otrora ubicados en las antípodas del fascismo clásico en la historiografía socialista— para fundamentar un híbrido ideológico «fascio-comunista» como instrumento de poder.

La utopía comunista

Dos grandes ilusiones sirvieron como poderoso imán a la militancia en un partido comunista durante buena parte del siglo XX. La primera tenía que ver con la percepción del comunismo como la herramienta que, por excelencia, permitiría superar injusticias y miserias atávicas; la segunda, que esta eventualidad no solo era posible sino inexorable, porque así lo había revelado el análisis científico del devenir social realizado por Carlos Marx.

¹ Ver Van Dijk (2006).

² Ver García L.(2009).

A lo largo del desarrollo de la civilización, la injusticia, expresada en la extendida pobreza e iniquidad en el disfrute de la riqueza, fue denunciada por profetas o líderes populares, y compartida por sectores esclarecidos, de avanzada. Pero las propias víctimas de tal situación, los pobres, raras veces tomaban conciencia de la fuerza que su aplastante mayoría numérica les confería para superar su ignominia, dada la opresión y la ignorancia a que estaban sometidos.³ De ahí, la significación de los discursos redentores de las principales religiones, que despertaban esperanzas en una vida mejor. ¿Quién discutiría que Cristo fustigaba las injusticias del mundo antiguo y que en otras profesiones de fe también podrán encontrarse similares argumentos liberadores?

Durante milenios el escaso o nulo desarrollo de la productividad en las labores agrícolas y de manufactura, se tradujo en una disponibilidad estancada de bienes y servicios para el consumo, con lo que el esplendor de una vida de lujos para unos pocos descansaba necesariamente en privaciones para las grandes mayorías, en una clásica distribución «suma-cero». La superación de la injusticia social presuponía, por ende, una lucha de pobres contra ricos. Pero los poderosos legitimaban tal iniquidad invocando un diseño divino: rebelarse en su contra desafiaría la voluntad de los dioses, desatando su ira. El ejercicio de la violencia para resguardar sus privilegios hacía que esta amenaza fuese muy creíble.

El incremento sostenido de la productividad que trajo la Revolución Industrial cambió los patrones de vida y las bases de convivencia en sociedad. La modernidad rompió con la percepción fatalista de que las injusticias sociales y la presencia de una vasta pobreza constituían el «estado natural» de las cosas. Por primera vez, el salto cuantitativo en la producción de bienes y servicios, y la lucha de sectores sociales por arrancarle a la oligarquía dominante una participación creciente en su usufructo, auguraba, en los países europeos, posibilidades ciertas de que podía superarse, para todos, la miseria. Marx le dio a esta esperanza un piso pretendidamente científico, al argumentar que esto no era solo una mera posibilidad sino una certidumbre, dada la mecánica del cambio social, cuyas «leyes» había develado en sus escritos, denominada luego por sus epígonos como materialismo histórico.

El milenarismo enfrentamiento de pobres y ricos se representaba ahora como la historia de la lucha de clases, cuya resolución inexorable vendría con la superación de las relaciones de dominación y de explotación, enraizadas en la apropiación excluyente de la riqueza social por parte de una minoría opresora. Solo faltaba que emergiera del devenir histórico el agente social que protagonizaría el cambio hacia la liberación definitiva de los oprimidos: el proletariado. Este debía trascender sus objetivos inmediatos de lucha, restringidos a sus reivindicaciones laborales, y asumir su rol de vanguardia política, tomando el poder para

³ Véase, Etienne de la Boetie, «Sobre la servidumbre voluntaria», circa 1548, <http://www.noviolenca.org/publicaciones/contrauno.pdf>

expropiar a los capitalistas y poner los medios de producción al servicio de la construcción de una sociedad comunista. En palabras de Marx, el cambio social revolucionario requería que el proletariado pasara de tener una conciencia de clase en sí, a verse como clase para sí, que la impulsase a la conquista del poder político. Ello pondría fin a la explotación del hombre por el hombre e inauguraría un reino de libertad y justicia.

Esta prédica resolvía convincentemente, a los ojos de muchos, las ansias milenarias por un mundo mejor, cultivadas desde la antigüedad. Pero no ocurriría como fruto de la voluntad de Dios, sino como resultado de la «voluntad» de la Historia (con mayúscula). Tiene fuerza poética la evocación de Marx al respecto:

En la fase superior de la sociedad comunista, después de que haya desaparecido la subordinación tiránica de individuos conforme a la distribución del trabajo y, por ende, también la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, después de que el trabajo se haya convertido no sólo en un medio de vida, sino en sí mismo en la primera necesidad de vivir, después que los poderes de la producción también hayan crecido y todas las fuentes de la riqueza cooperativa estén fluyendo más libremente con el desarrollo integral del individuo, entonces y sólo entonces puede ser dejado atrás el horizonte estrecho del derecho burgués y la sociedad inscribir en su estandarte 'de cada quién según su capacidad, a cada quién según su necesidad' (Marx, 1972: 29-31) (traducción propia).⁴

En este texto, emblemático, se anunciaba la liberación de la humanidad de sus penurias materiales; la superación de la alienación, propia del hombre «uni-dimensional» sometido a relaciones capitalistas de explotación y la generación de una jauja que alimentaría una sociedad solidaria, en la que cada quien obtendría del producto social según sus particulares requerimientos. El hombre saltaría así «del reino de la necesidad al reino de la libertad». Ausentes de esta «buena nueva» estaban, empero, los incentivos que generarían tal abundancia. Para el revolucionario alemán bastaba que el obrero fuera dueño de los medios de producción y, por ende, de sus circunstancias de vida, para que se entregara gustosamente a trabajar, ahora sin las férulas del capitalismo explotador.

Oponerse a este devenir era colocarse del «lado equivocado» de la Historia. Equivalía a una suerte de blasfemia, pues desafiaba la teleología que emanaba de la Ilustración, que confiaba en el dominio de la razón y en el progreso científico como fórmula para acabar con las miserias que habían plagado a la humanidad desde sus orígenes. Rechazar una filosofía de cambio, asentada en las fuerzas inexorables de la Historia, ofendía la moral

⁴ Curiosamente, este enunciado sólo puede entenderse como un reconocimiento de diferencias individuales, propias de la ideología liberal. La igualdad de hecho pregona en las doctrinas colectivistas que proclaman los epígonos de Marx, no acepta necesidades diferentes para cada uno de los miembros de una sociedad.

de aquellos que abrazaban esta convicción como artículo de fe. Quien no comulgaba con este ideario era tildado de reaccionario, aun cuando no estuviese comprometido con la estructura de poder existente. Ello alimentó una sensación de supremacía moral ante los detractores, que legitimaba su descalificación *ad-hominem*.

En su *Miseria del historicismo*, Karl Popper (1972) alerta sobre los peligros totalitarios que encierra la pretensión de que el devenir de la humanidad está sujeto a leyes científicas, propensas a ser instrumentadas por mentes esclarecidas en beneficio del progreso social. Similar crítica asume Isaías Berlin (2017), quien denomina tal postura como «cientificismo». Este último autor sugiere que mentes entrenadas en metodologías científicas, orientadas a precisar las leyes que regulan su ámbito particular de estudio, podrían pensar que la evolución social estuviese sujeta a un ordenamiento similar. Un cuerpo doctrinario como el marxismo, que aparentaba tener consistencia interna y profesaba explicar el devenir de la historia conforme a leyes que había descubierto, podría parecerles muy atractivo. Ello explicaría la fuerza que adquirió el marxismo en muchos círculos intelectuales europeos.

Muerto Marx, la lucha de los trabajadores por conquistar mejoras laborales comenzó a dar sus frutos. El ascenso progresivo en sus condiciones de vida en los países europeos occidentales hacia finales del siglo XIX amilanó el ímpetu revolucionario del movimiento obrero. Este difícilmente pasaba de la lucha reivindicativa y por mejorar su representación en el entramado político existente. Pero esta abdicación —en la práctica— de su papel predestinado de vanguardia, no conllevó mayor descalabro en la fe de los marxistas acerca de la superación inexorable del capitalismo por el socialismo. Lenin, en su famoso opúsculo, *Que Hacer*, se adelantó a sustituir la conciencia para sí de la clase obrera por la voluntad de un partido de cuadros que obraría en nombre de los «intereses históricos» de esa clase. Es decir, si la mecánica del cambio social no discurría de manera autónoma según las «leyes» descubiertas por Carlos Marx, correspondía al partido forzar este cambio para asegurar que la Historia fluyese como correspondía. Como corolario, una vez conquistado el poder, la Dictadura del Proletariado pregonada por el alemán no podía ser otra cosa que la Dictadura del Partido y, por ende, de sus dirigentes. La flagrante contradicción que encerraba esta propuesta —en el sentido de que las leyes «objetivas» del cambio social solo se materializarían por obra de la voluntad revolucionaria— en absoluto afectó el fervor de una militancia ensimismada de saberse agente de un cambio bendecido por la Providencia. Pero ello significó el fin de toda pretensión científica de la doctrina marxista: las leyes del cambio histórico no eran tales, por lo que terminó por reducirse claramente a una ideología. Quedaba así rota una de las principales distinciones que separaban al movimiento comunista del fascista. La excitación de pasiones a través de contraposiciones maniqueas, construidas con base en mitos, era ahora un expediente común a ambos para legitimar sus respectivas aspiraciones totalitarias.

El «Dios que falló»

Con este sugestivo título fue publicado en 1949 una recopilación de testimonios de importantes personeros de la cultura europea y estadounidense, sobre las razones que los motivaron a militar en el movimiento comunista de los años 20 y 30, y por qué rechazaron luego esta postura (Koestler *et al.*, 1949). Conflictos de naturaleza afectiva se entremezclan con justificaciones teóricas en la mayoría de los casos.

Para Arthur Koestler, la militancia comunista fue asumida como compromiso de fe.⁵ Y toda fe verdadera —señalaba— es radical, intransigente y purista. Al aceptar sus verdades incontrastables: «...el universo entero se ordenaba como piezas de un rompecabezas que se armaba mágicamente ... Ahora hay una respuesta para cada pregunta, dudas y conflictos pertenecen a un torturado pasado» (Koestler *et al.*, 1949:23).⁶

La sensación de seguridad que causaba haber develado los secretos de la dinámica social e histórica era sobrecogedora. Y siendo que el partido era depositario de los intereses históricos del proletariado, era custodio de esas verdades, por lo que sus decisiones eran objetivamente infalibles: «...moralmente, porque sus fines eran los correctos, esto es, acordes con la Dialéctica de la Historia, y estos fines justificaban cualquier medio; lógicamente, porque el Partido era la vanguardia del Proletariado, y el Proletariado es la encarnación del principio activo de la Historia» (Idem:34).

En un mundo convulsionado por múltiples manifestaciones de injusticia, la matriz comunista, forjada en la convicción de que era posible un mundo mejor si cada quien subsumía sus intereses individuales en un esfuerzo común compartido, transmitía una sensación de seguridad y de confianza en el porvenir, que sólo la fe puede otorgar. La veracidad o no de los hechos no era importante ni era lo que determinaría la justeza del planteamiento; lo real y, por ende, el criterio revolucionario de verdad, dependería de su funcionalidad para con el ulterior fin histórico. Todo lo que no encajaba con aquello era desestimado como distracciones o interpretaciones equivocadas. Sigue Koestler: «Proletarios que no fuesen Comunistas no eran proletarios reales —pertenecían al Lumpen-Proletariado o a la Aristocracia Trabajadora» (Idem: 49).

Posturas como éstas llevaron a la aberración de evaluar las acciones políticas, no en función de su valor intrínseco —si implicaban conquistas sociales específicas o no— sino por sus consecuencias para con los fines revolucionarios. Una iniciativa particular conducida con los mejores propósitos y que alcanzara logros importantes podía ser «objetivamente»

⁵ «A faith is not acquired by reasoning. One does not fall in love with a woman, or enter the womb of a church, as a result of logical persuasion. Reason may defend an act of faith-but only after the act has been committed, and the man committed to the act. ... A faith is not acquired; it grows like a tree. Its crown points to the sky; its roots grow downward into the past and are nourished by the dark sap of the ancestral humus» (Koestler *et al.*, 1949 :15).

⁶ «There is now an answer to every question, doubts and conflicts are a matter of the tortured past», prosiguió Koestler. (Todas las traducciones son del autor de este texto).

reaccionaria si no avanzaba la causa del partido, ya que apuntalaría al capitalismo. Y tal apreciación le correspondía hacerla el liderazgo partidista en atención a sus propósitos de lucha en un momento determinado y en tanto que intérprete, por antonomasia, de los intereses históricos del proletariado. Lo revolucionario hoy podría ser contrarrevolucionario mañana.

Lo que emerge de la vida de un militante es un sentido de pertenencia a una causa mucho mayor que él (o ella) que lo (la) elevaba a estadios superiores de realización como ser social. Le inducía a sacrificar gustosamente su interés personal ante el fin colectivo militante, sobre todo si provenía de la pequeña burguesía, como era el caso de la mayoría de los intelectuales que se incorporaban al partido. La extracción pequeñoburguesa era un pecado de origen que llevaba a intentos de expiación, acentuando el celo y la abnegación en el cumplimiento de las tareas encomendadas. La militancia y la disciplina partidista le proporcionaban al pequeño-burgués los medios para superar sus complejos de culpa. De ahí la ferocidad y crueldad de muchos intelectuales comunistas.⁷

Luego de la muerte de Lenin, Stalin aprovechó al máximo esta predisposición ciega de la militancia a cumplir con sus tareas «Históricas» para aplastar a quienes se le oponían en la lucha interna por el control del partido bolchevique. Robert Conquest (1990), en su libro *El Gran Terror*, que narra el proceso que llevó a los juicios de Moscú de los años 1936-1937, argumenta que muchos dirigentes del partido bolchevique desistían en oponerse a los designios de Stalin porque ello podría dañar la unidad del partido, instrumento histórico de la revolución. Louis Fischer, intelectual británico que llegó a ser miembro del partido, señala que éste era la institución más formidable de la Rusia Soviética, por sus requerimientos de austeridad, obediencia y dedicación impuesta a sus miembros, como si fuera una orden monástica.⁸ La disciplina y devoción del militante, y su lealtad absoluta a los postulados de la dirigencia, desembocaron en su anuencia acrítica para con las barbaridades cometidas por Stalin contra amplios sectores de la población en nombre de los fines superiores de la revolución, así como contra la generación bolchevique que había acompañado a Lenin.

Como advertía el historiador Tony Judt (2013), los kulaks (granjeros pequeños) liquidados durante la campaña de colectivización forzosa del campo a principios de los años 30 eran concebidos, no como víctimas de la represión estatal, sino como víctimas de la Historia. Al oponerse a la colectivización se habían colocado en su lado equivocado, por lo que debían ser barridos. Quedaba así sepultada definitivamente la sensibilidad social ante el sufrimiento que retrató Máximo Gorki en *La Madre*, que inspiraría a tanto joven a ingresar a la militancia comunista. Conquest (1990) recoge la confesión de un alto funcionario

⁷ El caso Pol Pot en Camboya, aunque muy posterior, es ilustrativo.

⁸ «The Communist's duties outnumbered his privileges. The Party expected him to be a model of antireligious zeal, ideological loyalty, personal morality, and political devotion» (Koestler *et al.*, 1949: 201).

a un ucraniano –quien luego desertó– reconociendo que la cosecha de 1933 había sido una prueba entre el partido y la resistencia de estos campesinos: «Tomó una hambruna para mostrarles a ellos quien era el amo aquí. Esto ha costado millones de vidas, pero el sistema de granjas colectivas está aquí para quedarse. Nosotros tenemos que ganar la guerra» (Conquest, 1990:18).

La fe y el espíritu de secta convirtieron al partido en una herramienta implacable para la centralización de la toma de decisiones en un reducidísimo grupo de dirigentes, la destrucción de todo contrapeso a su liderazgo en la estructura de poder y el control y la represión social y política de quienes se les opusiesen. Ello fue cultivado celosamente por Stalin y por sus más próximos allegados, manipulando las «verdades» de la doctrina para asegurar la obsecuencia de los militantes para con sus designios. ¿Cómo oponerse a las indetenibles fuerzas de la Historia? En palabras del británico Fischer: «¿Cómo protestar por la escasez de papas cuando se estaba construyendo el socialismo?».⁹

Y la izquierda internacional, lejos de denunciar el atropello a derechos humanos fundamentales, se congratulaba por presenciar la construcción del futuro glorioso de la humanidad. El imaginario que así se proyectó, aprovechándose de mitos históricos que respondían a las aspiraciones de justicia de los revolucionarios, pasaría a constituir una plataforma propagandística blindada contra toda crítica externa, la cual era descalificada como reaccionaria, al servicio de las clases dominantes. La ideología sirvió para apuntalar regímenes despóticos, de naturaleza totalitaria en países con escasa semejanza con aquellos cuyas condiciones habían llevado a Marx a pronosticar el triunfo del socialismo. Al cerrarse sobre sí misma de manera de excluir realidades poco asibles por el dogma o adversas, la ideología marxista-leninista abdicó, en la práctica, de sus pretensiones de ser intérprete de las aspiraciones de cambio social de las grandes mayorías, para degenerar en una poderosa herramienta de control social. Pasó a suministrar las «verdades» a partir de las cuales serían abolidas las libertades ciudadanas que sustentaban la autonomía y el libre albedrío del individuo en sociedad, convirtiendo a la población en masa informe cuya identidad emanaba de las directrices de un Estado Totalitario. El instrumento para asegurar tales designios era el Partido Comunista, trasmutado en secta inexpugnable a todo cuestionamiento externo. Su estructura vertical y el «centralismo democrático» que subordinaba la vida interna de la organización a los dictados de los órganos directivos, hacía de sus líderes sumos sacerdotes, encargados de mantener la fe y evitar el descarriamiento de sus ovejas. Esta secta devino en terrible maquinaria de

⁹ «The Soviets knew the hypnotic effect of the great dream, and as the promised future faded into the past they strove to keep alive the trust in delayed benefits. Among other things, they ordered all writers, in the middle of the 1930's, to treat the present as though it did not exist and the future as if it had already arrived. This literary device became known as 'Socialist realism'» (Koestler *et al.*, 1949:205).

dominación despótica, prácticamente imposible de combatir por la población sojuzgada, por su monopolio absoluto de la «verdad» y de los medios para ejercer la violencia.

El ocaso del sueño comunista

La URSS emergió de la II Guerra Mundial investida de aires libertarios al haberse sumado a los aliados en la lucha contra el nazi-fascismo. Ello contribuyó a ocultar los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen estaliniano, así como el oprobioso pacto de 1939, Molotov-Ribbentrop, con la Alemania nazi, con el que se repartieron a Polonia —entre otras cosas— y a renovar la fe entre los partidarios que habían repudiado tal pacto. No obstante, el famoso informe secreto de Kruschev sobre los crímenes de Stalin en el XX Congreso del PCUS de 1956, el aplastamiento brutal del levantamiento popular de Hungría ese mismo año ordenado por él, la erección del Muro de Berlín y la posterior invasión a Checoslovaquia por tropas soviéticas (1968), terminó por opacar todo brillo que podía quedar del sueño redentor comunista. Pero, en América Latina, la aventura romantizada de Fidel Castro en la Sierra Maestra contra la dictadura de Batista le dio nuevos bríos. La revolución pasaba ahora a ser el resultado de la voluntad y desprendimiento de unos pocos, quienes forjarían de la nada las ansiadas condiciones objetivas para que pudiera ocurrir el cambio (Debray, 1967). El foco guerrillero se convertía en *deus ex machina* en nombre de supuestas dinámicas históricas inexorables que, empero, había que forzar. El problema central de toda revolución era uno de voluntad y esta se demostraba alzándose en armas. La distinción con caudillos «salvadores de la Patria» de antaño se reducía apenas al uso de categorías de la retórica comunista. Una vez en el poder, el comandante cubano hizo de su enfrentamiento al gobierno de los EE.UU. una versión mucho más cercana y digerible de la épica bíblica de David contra Goliat, e inspiró con ello a muchos latinoamericanos.

A pesar del fracaso de las insurrecciones armadas de izquierda en la mayoría de los países —triunfó en Nicaragua y logró un acuerdo político en El Salvador—, el señuelo perduró en grupos minúsculos de vocación militarista. Pero sus idearios justicieros permearon partidos importantes de afiliación socialdemócrata, mellando su disposición a enfrentar la naturaleza totalitaria de estas posturas por considerar que, aunque equivocadas, eran de «izquierda». Por otro lado, la persistencia de enormes desigualdades y el escaso éxito de los gobiernos de la región por enrumbar a sus respectivos países en una agenda de desarrollo sostenible, de justicia social, mantenía a los ojos de muchos el atractivo romantizado de una revolución redentora de los pobres.

La Revolución Bolivariana

Hugo Chávez tuvo simpatías con segmentos de esta izquierda «anti-sistema» en sus años conspirativos, pero no tanto por razones doctrinarias sino por afinidad con su naturaleza

insurreccional. El ideario con que se catapultó al poder respondió más bien a patrones neofascistas (García, 2009) que evocaban la epopeya independentista como inspiración de una propuesta de redención de naturaleza patrioter. Se invocaba a un Simón Bolívar fantaseado, adalid del antiimperialismo y enemigo de una oligarquía que habría de entregar los destinos de la nueva nación a intereses foráneos. Como el Libertador había abogado vehementemente por la centralización del poder (en su persona), este aspecto fue uno de los más relevantes para las ansias de dominio que anidaban en la cabeza del caudillo golpista. Su propuesta se estructuró sobre una plataforma militarista que esbozaba la lucha política en términos de batallas, en las que el adversario se trastocaba en enemigo a liquidar y con el cual no cabía entendimiento alguno. Esta contienda se proyectaba en términos moralistas, enfrentando el bien, representado por los patriotas bolivarianos, en lucha contra el mal, personificado por la corrupción de la partidocracia «Punto-fijista» y demás «apátridas», enemigos del «proceso». Tal visión maniquea daba lugar a la legitimación de la violencia para reducirlos y a su discriminación desde el Estado. Chávez revistió a la Fuerza Armada de heredera del Ejército Libertador, representante de los verdaderos intereses de la Nación, que la rescatarían del oprobio adeco-copeyano. Semejante prédica encontró aceptación en la medida en que invocaba la tradición decimonónica venezolana de confiar en la figura providencial de un «hombre fuerte a caballo» para imponer la justicia.

Esta cruzada contra los que habían «traicionado a Bolívar» —la oligarquía que mantenía sojuzgados a los pobres— asumió una prédica liberadora que empezó a dar frutos cuando, luego de los primeros años turbulentos de su gobierno, se instrumentaron programas de reparto a los sectores humildes, financiados por un ingreso petrolero creciente. Estos programas afianzaron la lealtad de estos sectores y su sentido de pertenencia al proyecto «bolivariano», legitimando los preceptos retóricos que le servían de coartada. El carisma de Chávez y la prodigalidad de recursos que le proveyeron precios internacionales del petróleo que pronto alcanzaron los \$100/barril, apuntalaron esta fidelidad.

Chávez confesó que quién aconsejó la instrumentación de estos programas fue Fidel Castro. Bajo su inspiración, el presidente venezolano también captó rápidamente la funcionalidad del discurso comunista para con el objetivo de dismantelar el Estado de Derecho y concentrar el poder en sus manos, como había hecho el líder cubano 40 años antes. Cautivados por la figura heroica del apuesto jefe guerrillero, la población cubana en 1959 había sucumbido a sus promesas de redención después de años de corrupción batistiana: se entregó desprevénidamente. Cuando se dio cuenta de que las medidas de emergencia que reclamaba Fidel en sus arengas para «defender la Revolución» eran solo excusas para acabar con toda resistencia a su mandato e imponer su poder absoluto, ya era demasiado tarde. La adhesión de Cuba al bloque soviético, la censura y el control despótico de la información allanaron el camino a la conculcación de libertades y a la confiscación de toda

propiedad privada sobre activos productivos, que pasaron a ser manejados por el Estado. El usufructo discrecional de estos recursos por parte de quienes ocupaban las altas esferas de poder no tardó en reproducir la nueva clase denunciada por Djilas (1957) y Voslensky (1980) —entre los críticos más renombrados del «socialismo realmente existente»—, con su contraparte en la tarjeta de racionamiento y en las penurias padecidas por el pueblo que se le había rendido años antes a sus pies. Hoy, aspectos fundamentales de la economía cubana son manejados por una oligarquía militar a través del Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), colocado bajo el control del MinFAR, esquema que, aparentemente, sirve de referencia al régimen de Maduro.

Un socialismo peculiar

Chávez cabalgó sobre la retórica comunista a partir de 2004, llegando a declarar que era marxista aunque no había leído *El Capital*. Bajo esta representación, la «oligarquía traidora del Libertador» fue reemplazada por la de los oprobiosos capitalistas, aliados con el imperialismo norteamericano. El nominalismo patriotero con que se habían rebautizado con nombres de próceres o de batallas (*Santa Inés, Vuelvan Caras*) programas de gobierno, parques, infraestructura y proyectos adelantados o construidos por gobiernos anteriores, se contaminaba ahora con la jerga comunista: el nombre de cada ministerio se prologaba con el cognomento «del Poder Popular», se proyectaba la creación de un *Estado Comunal*, las empresas estatizadas milagrosamente amanecían socialistas y el primer epíteto con que se descalificaba a los contrincantes de la «revolución» era el de *ultra-derecha*.

Y la prédica comunista prestaba también otro importante servicio, cual era el de conferir a quienes la profiriesen una pretendida superioridad moral frente a sus detractores. No se trataba simplemente de que estos contrapusieran puntos de vista distintos. Quienes disienten de la «revolución» entorpecen la prosecución de intereses superiores, trascendentes, de la sociedad. Defienden objetivamente a las clases dominantes y, por tanto, su postura es oprobiosa, pues están del lado equivocado de la Historia; el de quienes, al dar su anuencia a privilegios inaceptables, niegan la justicia ínsita en la consecución de una sociedad que libere a los oprimidos de sus penurias. Señalarlos como «de derecha» va más allá de una calificación política; es un epíteto denigratorio que los identifica como lacra a ser combatida por oponerse al progreso. Esgrimir, por el contrario, posturas de izquierda redime a los «revolucionarios» y los exime de toda censura pues, por antonomasia, están defendiendo las causas más nobles de la humanidad. Cada calificación según las categorías de la retórica marxista-leninista, sea esta de «burgués», «capitalista» o de «lacayo del imperio» sirve, no para puntualizar determinada caracterización del otro, sino para descalificarlo como adversario o ente digno de ser reconocido. Son descalificativos ad-hominem, dirigidos contra personas específicas con la intención de estigmatizarlas para

liquidarlas políticamente y justificar su discriminación por parte del Estado. Como veremos más adelante, tal postura contribuye a explicar la sorprendente crueldad con que quienes esgrimen ser campeones de los mejores intereses de la humanidad someten a sus compatriotas a condiciones denigrantes, opresivas e inhumanas de existencia.

La convicción de estar asistidos por una supremacía moral explica por qué, en este escamoteo de la realidad, la oligarquía en el poder recurra frecuentemente a la proyección psicológica —mecanismo de defensa que atribuye a otros los propios defectos o carencias— tildando a sus opositores de oligarquía. Es común escuchar de boca de Diosdado Cabello o en la propaganda oficial, acusaciones contra la derecha fascista, refiriéndose a las fuerzas democráticas: los transgresores de la convivencia social no podían ser los auto-postulados «revolucionarios». Pero éstos y otros ejercicios onanistas, propios de mentes afiebradas con la mitología comunista, se estrellaban contra un país que ya no se prestaba a tales fantasías. No obstante, pudo edificar una falsa realidad que, como tal, resultó inmune a todo intento de falseamiento —criterio central del conocimiento científico positivista (Popper, 1962)— ya que sus referentes no provenían de la realidad empírica sino de las verdades reveladas en el dogma. La repetición de estas sumergió a Venezuela en una neolengua Orwelliana (Orwell, 1984).

En esta óptica, Chávez se hizo aprobar un Primer Plan Nacional Socialista¹⁰ por una Asamblea Nacional sin representación de fuerzas opositoras, debido al boicot por estas de las elecciones parlamentarias de 2005. Este documento sorprende por su excesiva adjetivación ideológica y, en tal sentido, constituye una pieza de retórica ajena a lo que comúnmente se propone en los planes de la nación, refractario al análisis riguroso y sistemático de objetivos, y de la evaluación de los instrumentos para alcanzarlos. Fue sucedido por el Plan de la Patria 2013–2019 que sería aplicado por su sucesor, Nicolás Maduro. Al igual que el anterior, las grandes elucubraciones sobre el devenir histórico que la «revolución» le tiene reservado a Venezuela y al mundo¹¹ se combinan con un listado de propuestas específicas con las cuales, en muchos casos, no existe mayor consistencia. No obstante, sirven de encuadre ideológico para encubrir prácticas de expoliación asociadas a la destrucción del Estado de Derecho, usando como señuelo un etéreo «Estado comunal».

Cabe señalar que la veta filocomunista de la retórica chavista se benefició de la tradición «socialista» del Estado venezolano bajo los gobiernos de AD y Copei. No me refiero a ninguna categorización rigurosa del término, sino al tutelaje estatal sobre la so-

¹⁰ Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista —PPS—, 2007-2013

¹¹ «Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria [...] Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana».

ciudad y la economía que se hicieron presentes en la mayoría –sino en todas– las iniciativas asumidas por estos gobiernos desde el llamado Trienio Adeco (1945-48). De ello tampoco escapó la dictadura (1949-58).¹² Las prácticas populistas de ambos partidos a través de subsidios, aumentos administrativos de salarios, controles de precios y de otros mecanismos de intervención económica, dieron pie a una idea de socialismo en la que el Estado proveería, gracias a la renta petrolera. Tal expectativa asentó buena parte del apoyo popular logrado por las dos fuerzas. Ello formó parte de nuestra cultura paternalista, según la cual, los venezolanos tenemos derechos a exigir sin que ello se base en que cumplamos con nuestros deberes.

Esta asociación le vino como anillo al dedo a Chávez para proyectar sus programas de reparto clientelar como prefiguración de un nuevo orden social, en contraposición al naufragio en que habían caído, luego de los años 70, las promesas de bienestar que habían hecho las «cúpulas podridas del PuntoFijismo». Éste reparto sería su marca de «socialismo» –a pesar de que nada tenía que ver con la fundamentación productivista del cambio social propuesto por Marx– y sirvió de excusa para dismantelar las instituciones propias de una economía de mercado. Las nociones de competencia, productividad, libre juego de la oferta y la demanda, precios, incentivos y costos de oportunidad, fueron estigmatizadas como expresiones de un oprobioso capitalismo que había que erradicar porque impedían el justo acceso del pueblo al disfrute de su riqueza. Más allá, la prédica socialista sirvió para legitimar distintas variedades de intervención estatal en la economía, conforme a la pretensión de que se estaba planificando el uso de los recursos en función de la sociedad, y no de mezquinos intereses mercantiles. Bajo este argumento se procedió a fijar los precios de un creciente número de bienes y servicios, y a regular cada vez más sus condiciones de producción y comercialización. Asimismo, justificó, en el discurso oficial, la expropiación o confiscación de numerosas empresas, en su mayoría en plena producción. A pesar de sus efectos perversos, tenía el sello de aprobación socialista.

El Estado Patrimonialista

La prevalencia del Estado como ductor de la economía encontró en las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro sus expresiones más acabadas. El primero logró articular un dispositivo macroeconómico para maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del fisco para la prosecución de sus fines políticos, saltándose los controles sobre su usu-

¹² Un hecho indicativo de la orientación estatista de la dictadura lo proporciona el caso del proyecto presentado a Pérez Jiménez por el Sindicato del Hierro, consorcio de 170 personas lideradas por Eugenio Mendoza, referente a la construcción de una Siderurgia Nacional, para lo cual solicitaban medidas de protección frente al acero importado. El dictador simpatizó con la idea, pero le hizo saber a los proponentes que el Estado se reservaría la ejecución del proyecto, desestimando la participación privada (Ruiz, 1997:157). Así se originó la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) de propiedad estatal, culminada en 1958.

fructo y aplicación. Para ello, fue abatiendo progresivamente las instituciones del Estado de Derecho, en particular, las referentes a la rendición de cuentas, y a la acción contralora de poderes autónomos y de los medios de comunicación social, lo cual facilitó el usufructo discrecional de los recursos públicos en función de intereses particulares o grupales. El desmantelamiento del ordenamiento constitucional permitió la centralización del poder y de la toma de decisiones en manos de la Presidencia de la República, y la sumisión a esta de los demás poderes. Se ha llegado al extremo de desconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y pretender suplantarla con una Asamblea Nacional Constituyente conformada con partidarios del gobierno. Instrumental en este golpe de Estado ha sido la actuación de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la anterior Asamblea Nacional —dominada por el chavismo— que avaló «jurídicamente» el nuevo órgano fraudulento.

El alza en los precios del petróleo venezolano en los mercados internacionales, hasta superar los \$100 el barril, permitió acumular una formidable base financiera que se volcó en un gasto público discrecional, incluyendo la instrumentación de diversos mecanismos para transferir recursos a sectores de bajos ingresos —su base política de apoyo por excelencia— a través de las misiones.¹³ El propio Chávez denominó a este reparto «socialismo petrolero». No puede negarse que durante los años de bonanza petrolera el consumo de estos sectores mejoró.

Como parte de este «socialismo», el régimen se arrogó la fijación de precios de los bienes y servicios, y de los canales a través de los cuales deben ser comercializados; decide quién contrata con el Estado y bajo qué modalidades, qué cosas importar y cómo, y a quiénes se les entregan dólares preferenciales. Asimismo, asume la prerrogativa exclusiva de asignar concesiones mineras y petroleras y se reserva otras a discreción, sin rendir cuentas y eximiéndose de la acción contralora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación. Más allá, un TSJ írrito «válida» que se salten los controles y resguardos que establece la Constitución en materia presupuestaria: una patente de corso para manejar a discreción los recursos pertenecientes a todos los venezolanos por parte de quienes están en el poder. No hay restricción institucional alguna, una vez abatido el Estado de Derecho, para evitar que los dineros públicos sean apropiados por manejos irregulares.

Amparadas en la prédica socialista, se fueron asentando prácticas de apropiación y usufructo de bienes, servicios y dineros con base en criterios políticos, y facilitados por las relaciones de poder dentro de, o en relación con, el aparato de Estado. En resumen, se

¹³ Entre otras aplicaciones de estos cuantiosos recursos está la «compra» de aliados internacionales a través de ventas de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de deuda y otras ayudas.

conformó un dispositivo amplio para la aplicación de medidas de control y sanción sujetos a la discreción del funcionario público –civil o militar– encargado de su cumplimiento. Los controles de precio y las regulaciones punitivas han representado una veta sumamente lucrativa para el arbitraje (reventa de productos, gasolina o dólares regulados), la sobrefacturación de importaciones, el desvío de alimentos y otros recursos destinados a los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción que otorgan bolsas de artículos de comida a precios regulados) para su comercialización a precios muy superiores y la extorsión por parte de funcionarios militares o civiles con incumbencia al respecto, en virtud de normas punitivas implantadas. Esta labor «fiscalizadora» ha llegado, según reiteradas denuncias, a la abierta confiscación de bienes por parte de estos funcionarios. Adicionalmente, deben mencionarse las contrataciones turbias del gobierno y de empresas públicas. El múltiplo del precio al que el consumidor consigue muchos bienes por sobre el regulado, el diferencial entre el precio en el que se vende la gasolina en Venezuela con el de los países vecinos y el abismo entre la cotización Dipro del dólar («Divisas Protegidas» a Bs. 10/\$)¹⁴ y la del mercado paralelo, dan una idea de las inmensas oportunidades de «negocio» involucradas. La adquisición de ciertos derechos o beneficios, como la Pensión de Vejez, se prestan, asimismo, para pagos «por debajo de cuerda». Estas prácticas se han afianzado con la impunidad, la falta de transparencia y la no rendición de cuentas, así como con la complicidad desde las altas esferas del poder. Así lo atestigua la defensa irreflexiva por parte del presidente Maduro de aquellos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y de otras irregularidades, a quienes ha encumbrado, como respuesta, en altos cargos.

Con ello se fue conformando lo que Max Weber (1978) denominó Estado Patrimonialista, referido a la confusión del patrimonio público con el privado por parte de monarcas europeos antes de que el desarrollo de las instituciones del Estado moderno resguardara y deslindara ambas esferas de interés. Retrotraerse a las prácticas expoliadoras de un Estado Patrimonialista, superadas hace siglos por la construcción del andamiaje institucional del Estado de Derecho moderno, requiere de un ideario que lo justifique y lo enmarque en propósitos que simulen o escondan el enriquecimiento personal que es, en verdad, la ulterior motivación que lo sustenta. El chavismo remanente necesita de una narrativa que disuelva sus atropellos y les allane toda resistencia moral o de conciencia para aplicar medidas represivas o cometer otras injusticias, con tal de continuar extrayendo la riqueza nacional. Es este el papel asignado a esa combinación ideológica «fascio-comunista». En un sincretismo que abreva en la deriva nacionalista del bloque comunista –una

¹⁴ Eliminada por el Convenio Cambiario N° 39, publicado en Gaceta Oficial N° 41.329, del 26 de enero, 2018.

vez que se tornó insostenible su promesa de mayor bienestar para su población que la que conseguirían en países del occidente europeo (Mazower, M., 2001)—, se invocan sentimientos patrioteros anclados en la Guerra de Independencia, con la argumentación de que se está edificando una sociedad en la que no seguirá mandando la burguesía explotadora (término intercambiable con el de oligarquía en el imaginario original de Chávez), sino el *pueblo*. En este orden, la *historia* está de su parte, porque ello apunta necesariamente a la sociedad socialista. Y para construir el socialismo es menester abatir las instituciones «liberal-burguesas» que dan sustento al dominio capitalista, es decir, al Estado de Derecho y las normas que aseguran el funcionamiento de una economía de mercado. A falta de estas instituciones, queda el país desamparado y vulnerable ante la rapacidad de quienes ejercen posiciones de fuerza. Se instala en Venezuela el Estado Patrimonialista (García, 2016). Pero a diferencia de las monarquías de antes, la soberanía no reside exclusivamente en quien ocupa la máxima posición ejecutiva, por lo que la ideología sirve de justificativo para que la maquinaria administrativa coadyuve con la expoliación de la riqueza social. Y como defensa, las denuncias sobre manejos irregulares de los dineros públicos son «contra-denunciadas» como conspiraciones de intereses antinacionales contra la «revolución».

La apropiación privada del país

Se persigue articular una red de complicidades a distintos niveles que permita que las acciones de expoliación —ya sean extorsiones, sobrefacturación en compras o en importaciones con dólar regulado, comisiones y otros ilícitos en la contratación con empresas del Estado— puedan fluir sin obstáculos. Además de hacer cómplice a los funcionarios que desde distintos niveles les toca decidir o hacerse los locos ante manejos turbios decididos por otros, la ideología también ayuda a coaccionar a los que titubean: estarían transigiendo con el «enemigo», por lo que serían considerados traidores a la «revolución», con castigo de perder el empleo, su participación en programas sociales (misiones), bolsas Clap u otras prebendas. Y así como la ideología convertía al Partido Comunista en ejecutor implacable y sin misericordia de la voluntad de Stalin, sirve ahora para hacer de la maquinaria administrativa del Estado un vehículo para el cometido sin chistar de todo tipo de atentados contra la cosa pública. Esto no quiere decir que todo empleado estatal se convierta automáticamente en corrupto —confiemos en que en su mayoría sean honestos— sino que los manejos irregulares son absueltos o encubiertos. La ideología los coloca fuera de todo reclamo porque se legitiman con una retórica «revolucionaria» en la que lo justo se define con relación a su funcionalidad con los intereses de quienes detentan el poder. Los honestos simplemente deben callarse la boca, so pena de perder su empleo.

Lo que defiende la ideología, empero, no es la promesa de un futuro mejor para todos, sino el reclamo de que Venezuela es propiedad de los chavistas, les pertenece. Ello

encuentra asidero en la proyección del chavismo como auténtico heredero de Bolívar. Por ende, son ellos los únicos que merecen conducir los destinos de la Nación. Mejor dicho, ellos son la Nación. Como señala Diego Bautista Urbaneja (2015), Chávez marcó una ruptura con la tradición de los gobiernos anteriores de intentar construir consensos en torno a sus propósitos de política. Él y los suyos nunca dudaron en que había que imponer su proyecto; los que lo habían precedido eran expresión de la hegemonía de una oligarquía que había traicionado a Bolívar. Y, con esto en mente, el usufructo de la renta ha sido usado para afianzar su predominio excluyente. En atención a esta percepción, la ética del mercado y la noción de ciudadanía de la democracia liberal, fundamentadas ambas en una institucionalidad impersonal en la que privan decisiones tomadas sin distingo político por individuos o entes autónomos, son reemplazadas por una «moral» que premia la lealtad personal a la causa. Ello implica el desmantelamiento de instituciones, en tanto que reglas de juego impersonales gobernadas por leyes y hábitos, y su reemplazo por relaciones de sujeción personal, en las que las lealtades y el afecto cultivado se sobrepone al Estado de Derecho (González, 2015). Los beneficios o la razón de ciertas gratificaciones no van a depender, por tanto, de criterio alguno de meritocracia –talento, creatividad, esfuerzo, aportes al bienestar social, cumplimiento de deberes– sino de la obsecuencia o complicidad con quienes determinan, a discreción, cómo pueden usufructuarse los recursos del país. Pero como señalara Orwell en su *Rebelión en la granja* (2003), «algunos son más iguales que otros»: es el posicionamiento en la jerarquía de poder lo que habrá de definir cómo se dirimen las disputas por la participación en los frutos de la depredación del producto social.

Cuando los chavistas exclaman agresivamente que no aceptarán ser desplazados del poder están reclamando derechos sobre una propiedad intransferible de un país que consideran suyo; y como todo bien privado, su usufructo excluye a quienes no son «propietarios», es decir, a todos los demás. Por definición, estos no son pueblo, pues –como señalaba Koestler respecto a los proletarios que no fueran comunistas– la categoría de pueblo se define a partir de su afiliación con el imaginario chavista.¹⁵ La ideología comunista cumple el objetivo, entonces, de investir de un discurso legitimador a reglas de apropiación de la riqueza basadas en el abuso discrecional del poder, en el desapego a la lógica del mercado y a las acotaciones que prescribe el Estado de Derecho: las transacciones mercantiles serían –según los clichés de rigor– un vehículo para la extracción de plusvalía y, por tanto, de la dominación burguesa. Y así, en nombre del socialismo, justifican ante los suyos la apropiación de bienes públicos que, por definición, no deberían excluir a nadie de su usufructo.

¹⁵ El grupo de oficialistas que irrumpió en el Palacio Legislativo el domingo 23 de octubre de 2016 para sabotear las deliberaciones de la representación popular ahí fue reivindicado por Maduro como la «voz del pueblo» que se hizo escuchar.

El manejo discrecional de Petróleos de Venezuela juega un papel particularmente importante en este afianzamiento del sentido de propiedad. Luego de descabezar a esa empresa y despedir a unos 20.000 empleados por su alegada participación en el paro 2002-2003, Chávez la convierte en instrumento de su proyecto político. Bajo la consigna, «Ahora Pdvsa es de todos» y acompañado de la mentira abierta de que él había «nacionalizado» la industria, Pdvsa pasa a controlar una gran cantidad de empresas sin conexión alguna con su misión corporativa original (petrolera) para financiar prácticas clientelistas en las que se ofrecen servicios y bienes a precios subsidiados a cambio de lealtades. La identificación con la «revolución» pasa a ser, entonces, un mecanismo directo para ejercer la «soberanía» sobre nuestra principal riqueza natural que, por definición, es de la Nación. Y esta ilusión de ser partícipe en lo que es nuestro se ve concretada cuando los precios petroleros se disparan hacia las proximidades de los 100 dólares el barril en los mercados internacionales.

Los programas de reparto y las transferencias que por vías diversas llegaron a las bases de apoyo del chavismo permitieron que, entre 1998 y 2012, el consumo privado por habitante aumentase en un 55,3 por ciento, a pesar de que la productividad apenas creció en un 3 por ciento.¹⁶ Al superarse un capitalismo oprobioso, con sus reglas de asignación basadas en precios, el pueblo podía ahora disfrutar directamente de su propiedad. El «socialismo» hacía suyo el país, razón por la cual había que cerrar filas en torno al gobierno. Lamentablemente, el costo de ello ha sido la destrucción de capacidades productivas de la empresa petrolera, proveedor del 96 por ciento de las divisas que ingresan al país por exportaciones.

La relativización de normas ante la trascendencia de la causa emprendida —el fin justifica los medios— excita el sentido de pertenencia y de allí esa frase tan manida de: «nos quieren quitar lo que es nuestro para volver a los esquemas de dominación del pasado». En este orden, se les ofrece a los partidarios ciertos privilegios que, aun cuando muchas veces son magros, marcan una diferencia porque excluyen al resto de la población. El caso de los Clap es un buen ejemplo. Se canalizan a través de organismos partidistas que discriminan a quienes han manifestado opiniones contrarias al gobierno. Para su obtención, como para ser beneficiado por otros programas sociales, el venezolano debe registrarse para obtener un «Carnet de la Patria», instrumento de control social. Otro ejemplo es el de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuyos adjudicatarios —no se les entrega título de propiedad— viven bajo amenaza de ser desalojados si se les descubren comportamientos opositores

¹⁶ Entre 2012 y 2016, según datos suministrados por la República Bolivariana de Venezuela a la Securities and Exchange Commission de los EE.UU., la productividad se habría reducido en un 31,2 por ciento y el consumo privado por habitante en 29,3 por ciento.

a Maduro. La advertencia de que estas viviendas, entregadas en recompensa a lealtades con la «revolución» se perderán de retornar los «oligarcas» al poder, se convierte en un poderoso aliciente para cerrar filas, prestos al combate, tras el gobierno.

El dominio creciente de los militares sobre la economía

Particular significación ha adquirido la participación militar en estos mecanismos, pues hoy constituye el principal sustento del gobierno. Chávez le fue entregando parcelas de poder para asegurar su lealtad, sobre todo después del efímero golpe que lo destituyó en 2002. Se apoyó en la tradicional distancia del mundo militar con respecto al civil para forzar la identificación castrense con el régimen. Lo que podría llamarse los elementos constitutivos de una «ideología» republicana en nuestro país descansan fuertemente en el reconocimiento inicial de un tutelaje militar sobre sus destinos. A lo largo de buena parte de nuestra historia, éstos vieron con claro desprecio a los civiles, requeridos de su control paternal por no tener ni la disciplina ni el compromiso con los ideales superiores de la Patria que aquellos habían aprehendido en los cuarteles o heredado de Bolívar. Puede aventurarse el argumento de que la idea de ser «dueños» de Venezuela es natural a los militares. Lo respalda la mitología, tantas veces invocada, de su glorioso papel como forjadores de la independencia en los campos de batalla y los retazos de «ideología republicana» con que son formados los venezolanos desde pequeños. En los libros con los que se les enseña a los párvulos historia nacional, las batallas ocupan un lugar mucho más significativo que cualquier aporte del mundo civil a la construcción de las instituciones republicanas. La figuración de los militares como ciudadanos de primera al comienzo de la República se proyecta a lo largo del siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX, por constituir ellos el factor decisivo de poder. Solo a partir del trienio adeco —con la interrupción pérezjimenista— el mundo civil logra desplazar del protagonismo político a los militares.

Chávez, en su afán de poder, proyectó a los militares como soldados de Bolívar y, por tanto, obligados a defender la Patria contra quienes eran señalados por él de traicionarla. Desde la Presidencia fue adulterando la función de la Fuerza Armada dentro del ordenamiento legal del país a través de cambios sucesivos en la ley que la rige. Pasó a llamarse «bolivariana», designación con que se identifican las fuerzas de gobierno, se le dio al Presidente funciones operativas como Comandante en Jefe y se introdujo un cuerpo de milicias, inexistente en la Constitución, directamente vinculado a él. Asimismo, Chávez logró introducir de contrabando una variante de la consigna cubana, «Patria o Muerte, venceremos», añadiéndole la palabra «socialismo» para que «Patria, Socialismo o Muerte», fuese el saludo obligado entre la oficialidad.

En estos empeños por partidizar e ideologizar a su favor al estamento militar, violando lo dispuesto en el artículo 328 de la Constitución,¹⁷ el chavismo contó con una larga tradición militarista venezolana. Lo particular es que esta deferencia para con los militares se haya acentuado bajo un gobierno que se autoproclama «revolucionario». América Latina muestra un largo historial de lucha contra regímenes militares que marcó a los movimientos revolucionarios en casi todo el continente. Sólo con el general Velasco Alvarado en Perú a comienzos de los años 70 y, brevemente, con el general Juan José Torres en Bolivia, es que se asoma la posibilidad de que un gobierno militar pudiese concebirse de «izquierda». A partir de ahí, fueron presentándose más movimientos militares que se postulaban de «revolucionarios», como Omar Torrijos en Panamá, Lucio Gutiérrez en Ecuador y los hermanos Humala en Perú. Pero donde más hondo caló esta curiosa fórmula fue, sin duda, en la Venezuela de Hugo Chávez. Como se ha comentado en estas páginas, la invocación de la épica independentista como inspiración y el señalarlos como los auténticos herederos de Bolívar, le «lavó la cara» a los militares ante buena parte de la población que, desde una postura que desconfiaba de ellos por su propensión represiva, pasó a apoyarlos durante los primeros años de gobierno por considerarlos partícipes de un proceso redentor conducido por Hugo Chávez.

Bajo la presidencia de Nicolás Maduro se ha puesto de manifiesto la bancarrota del llamado «socialismo del siglo XXI» y se ha reducido drásticamente el apoyo popular a su gestión, por lo que el estamento castrense se ha convertido en el eje que sostiene su gobierno. Pero, a pesar del deterioro de su imagen en la medida en que reprime la protesta popular, desde categorías ideológicas de «izquierda» se intenta condonarlo a cuenta de que apoya a la «revolución». De manera que se ha asentado un gobierno altamente militarizado, represivo, violador de los derechos humanos, cómplice de la expoliación del país y de las crecientes penurias que padece su población, pero que la Historia «absolverá», porque son «revolucionarios».

La afinidad del comando militar con el gobierno se ha perseguido con la deliberada promoción de los suyos a los más altos niveles de mando y la marginación de aquellos que, por su apego institucional, no se prestan a ser utilizados políticamente y, por tanto, no serían de confiar al frente de tropas. Hoy, militares ocupan numerosas gobernaciones y

¹⁷ «La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica».

controlan 12 de 32 ministerios, en particular los relacionados con la economía. En total, entre activos y jubilados, cerca de 2.000 oficiales han pasado por altos cargos en la administración pública bajo los gobiernos de Chávez y Maduro.

Para afianzar su lealtad, Maduro —sin duda siguiendo consejos cubanos— ha buscado corromper a las líneas de mando poniendo a los militares directamente a cargo de muchas de las responsabilidades en el manejo discrecional de los asuntos económicos. En una economía como la nuestra, con precios controlados a niveles totalmente divorciados del costo de oportunidad de producir o comercializar bienes y servicios, con leyes punitivas para castigar a quienes se salten los controles y el custodio de prácticamente todas las transacciones que puedan hacerse, les proporciona a los militares oportunidades de enriquecimiento a través del arbitraje, la extorsión, la confiscación o desvío de mercancías para otros destinos, amén del enorme lucro representado por los intercambios en dólares, dada la gigantesca distorsión entre la cotización oficial de la divisa y la del mercado paralelo.

Hoy la FAN Bolivariana es dueña de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras, y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), constituida recientemente para intermediar en las subastas y demás negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país, de cuyo manejo, por lo demás, los militares saben muy poco. Adicionalmente, están al frente de la CVG, de los puertos y aeropuertos, de Minerven, Corpolec, Pequiven, Edelca, Enelven y ahora, de la joya de la corona —con gran pérdida de lustre— Pdvsa. Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían no menos del 70 por ciento de la economía venezolana.¹⁸ Una idea de la extensión de este control lo ofrece el portal *Armando.info*, que publica un reportaje de periodistas de investigación que cruzaron datos referentes a los contratos públicos del actual gobierno con la nómina de la alta oficialidad de la FF.AA., para encontrar que «al menos 785 oficiales activos» están al frente de empresas de construcción, servicios de seguridad, suministros médicos, alimentos, transporte, comerciales, informática y más, que contratan con el Estado.¹⁹

Con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, monopolizan la importación y distribución de alimentos y medicamentos esenciales, para lo cual, hasta finales de enero de 2018, tenían acceso a dólares a la tasa Dipro (10 Bs/\$). Adicionalmente, custodian las fronteras y las aguas territoriales, más allá de las cuales el precio de la gasolina se multiplica por

¹⁸ <http://impactocna.com/el-ejercito-de-ocupacion-que-opera-en-venezuela/>

¹⁹ https://armando.info/AiData/outsourcing_Militar#militares

centenas. Amparados en leyes punitivas como la de «precios justos», ejercen acciones policíacas contra comerciantes, propensas a prácticas de extorsión y confiscación. En un ambiente de opacidad total en los asuntos públicos, de no rendición de cuentas, de cerceamiento de la libertad de prensa y de anulación de la función controladora de la Asamblea Nacional, las oportunidades para lucrarse, arbitrando entre los abismales diferenciales de precio que resultan de estos controles y del disparatado régimen cambiario, o inventando negocios ficticios para ponerle la mano al dólar barato, son sencillamente monstruosas. Cabe mencionar, además, las posibilidades que ofrecen el Arco Minero y Pdvs, amén de los señalamientos sobre militares incursos en narcotráfico.

El sistema de regulaciones, controles y prohibiciones del llamado «socialismo del siglo XXI», se traduce en reglas de juego –instituciones– que generan grandes incentivos para la corrupción, más cuando esto ocurre en un marco en el que no existe transparencia ni rendición de cuentas. Ello encuentra asidero en fuertes intereses, cual mafias, que se han apertrechado en los nodos de decisión del Estado. El involucramiento militar en estas acciones difícilmente puede evitarse cuando existen incentivos tan poderosos. Pero tampoco se le intenta reprimir, pues la verdadera intención en el fondo es hacer de los mandos militares cómplices del sistema de explotación instaurado. La defensa abierta y desembozada por parte de Maduro de altos oficiales señalados de estar involucrados en operaciones de tráfico de drogas por parte de las autoridades de la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos, constituye una muestra bastante evidente de tales intenciones.

La apropiación del Estado

Al denostar del capitalismo y de las relaciones mercantiles que regulan el intercambio, la oligarquía militar civil que controla el poder en Venezuela «legítima» prácticas de apropiación y usufructo de bienes, servicios y dineros basados en las relaciones de poder dentro de, o en relación con, el aparato de Estado. Y como recordara Mao ZeDong, el poder emerge de la boca de un fusil.

Quienes han estudiado el fascismo clásico reconocen su naturaleza revolucionaria. Se propuso, al igual que el comunismo, destruir el Estado liberal burgués. Pero, a diferencia de este, ello no suponía necesariamente la socialización de los medios de producción, a pesar de que conformó una economía de comando para controlar la producción, notoriamente en el caso del nazismo alemán. En Venezuela el foco de la atención de la Revolución Bolivariana no ha sido la expropiación de los capitalistas –que sí la ha habido en no pequeña medida–, sino la expropiación del pueblo, en tanto que soberano de cuya voluntad debe responder el ejercicio del poder público (Art. 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -Crbv). En analogía marxiana, su objetivo no ha sido mudar la propiedad sobre los medios de producción, sino transmutar la propiedad sobre

el Estado. No otra cosa es el desmantelamiento del Estado liberal de Derecho, con sus contrapesos al poder central y sus garantías individuales, civiles y sociales. Las relaciones de producción capitalista fueron reemplazadas por relaciones de depredación de una oligarquía atrincherada en los nodos del poder y, entre ellos, por quienes alardean de su monopolio de la violencia: «esta revolución es armada».

Para apropiarse del Estado, Chávez se propuso desde el comienzo de su gestión centralizar el poder en sus manos, subordinando a los demás poderes públicos a su voluntad, en nombre de los intereses del «Pueblo». Ello se facilitó por el dominio por parte del oficialismo del Poder Legislativo y su consecuente obsecuencia en atender los mandatos del Presidente. Sin embargo, luego de su muerte, la correlación de fuerzas políticas se modificó progresivamente a favor de la oposición, permitiendo a ésta conquistar una mayoría calificada en las elecciones parlamentarias de diciembre 2015. La estrategia asumida por el régimen ante esta contrariedad fue la de anular por distintos medios las atribuciones y prerrogativas constitucionales de la Asamblea Nacional, órgano que, por excelencia, representa la pluralidad de intereses de la soberanía popular «consagrada en el artículo 5° de la Constitución» como fuente del poder del Estado. Con ello se daba al traste con el último vestigio institucional que quedaba respecto al equilibrio y autonomía de los poderes públicos.

En prosecución de su estrategia, el oficialismo logró reforzar su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designando a finales de diciembre, 2015 —antes de que culminara el período de la anterior Asamblea Nacional— nuevos integrantes a ese cuerpo, partidarios suyos, sin observar los requerimientos exigidos por la Carta Magna y sin que el período de quienes fueron forzados a dimitir estuviese vencido.²⁰ Con el control total del máximo tribunal, el régimen anuló la juramentación de los diputados indígenas y los correspondientes al estado Amazonas realizada por el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral -CNE), nominalmente independiente. Impedía así la mayoría calificada de las dos terceras partes que habían logrado las fuerzas democráticas en el cuerpo legislativo nacional, que le daba importantes prerrogativas, como la aprobación de Leyes Orgánicas y la remoción de los magistrados del TSJ.²¹ Aprovechó, además, para declarar a la Asamblea Nacional recién electa «en desacato» por haber admitido a estos diputados, a pesar de que luego se desincorporaron voluntariamente para facilitar la dilucidación de la pretendida impugnación de su elección.

²⁰ La Constitución establece, en su artículo 263, que los requerimientos para ocupar un sillón en el Tribunal Supremo de Justicia son, entre otros, no ser militante de un partido político, haber sido profesor de Derecho en una universidad reconocida por al menos 15 años, ser profesor titular o haber sido juez en tribunales menores con al menos 15 años de experiencia. Ninguno de los nuevos jueces cumple la totalidad de estos requisitos.

²¹ La aprobación de Leyes Habilitantes requiere una mayoría calificada de sólo las tres quintas partes, que siguió poseyendo la representación opositora.

Con la excusa del desacato, el TSJ procedió a invalidar leyes aprobadas por el órgano legislativo, esencia de sus facultades. Asimismo, en este afán de desconocer las atribuciones de la AN convalidó el Decreto de Emergencia y Estado de Excepción presentado por el Ejecutivo,²² sin que este hubiese sido aprobado por el órgano legislativo. Este decreto ha sido renovado sucesivamente de manera automática, en violación de lo establecido en la Constitución, resultando en una especie de Ley Habilitante permanente que entrega potestades extraordinarias al Presidente, independientemente del parecer del Poder Legislativo. Para febrero de 2017, el máximo tribunal había vulnerado 42 de las 77 atribuciones que la Constitución le confiere a la Asamblea Nacional, según denuncia de Ramón Guillermo Avelo, ex parlamentario.²³ Entre las más graves usurpaciones de las funciones de la AN, fue la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, en octubre de 2016, que eximió al gobierno de presentar el proyecto de presupuesto 2017 ante ella para su aprobación, violando abiertamente lo dispuesto en los artículos 187 y 313 de la Constitución.²⁴ Ya el Ejecutivo se había arrogado la asignación de créditos adicionales durante del ejercicio fiscal 2016, cercenando la potestad –también estipulada en el artículo 187, # 7– que tiene sobre ello el órgano legislativo. Tal violación del orden constitucional fue repetida al someter el proyecto de presupuesto anual para 2018 a la consideración de una fraudulenta «Asamblea Nacional Constituyente» y no a la Asamblea Nacional.

De esta manera, el Ejecutivo se sacudía la evaluación de la representación popular electa sobre un instrumento de política económica y de desarrollo de primer orden, el Presupuesto de la Nación. Librado –inconstitucionalmente– del control y de la necesidad de rendirle cuentas a la AN, el régimen puede asignar recursos para fines partidistas o grupales a discreción: el Estado les pertenece y, por tanto, puede hacer con los dineros públicos lo que mejor les parece. La apropiación de bienes públicos para uso personal –camionetas, escoltas, viáticos generosos y otras prebendas otorgadas a los jefes chavistas a través de los años– no deben someterse al escrutinio de un poder legislativo independiente. Mucho menos las comisiones y demás exacciones al tesoro nacional a través del manejo discrecional, sin rendición de cuentas, de las partidas de gasto.

²² Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario, del 13 de mayo de 2016. Según el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el decreto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y, conforme al artículo anterior (# 338), tendría una duración de 60 días, prorrogable una sola vez con el visto bueno del órgano legislativo. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el presente caso.

²³ Diario El Nacional, 12 de febrero, 2017.

²⁴ El TSJ declaró el 11 de octubre de 2016: «Que en esta oportunidad el Presidente la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia (la Sala Constitucional del TSJ) de la jurisdicción constitucional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley, la cual ejercerá el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental, todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria».

Extremando aún más su desconocimiento de las potestades de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo buscó «legalizar» la usurpación de sus funciones mediante las sentencias 155 y 156 emitidas a finales de marzo, 2017, con el alegato de que continuaba en «desacato». Quiso desconocer, además, la inmunidad que le asiste a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, consagrada en la Constitución. Reinterpretó unilateralmente el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para excluir la aprobación de la Asamblea como requisito para la conformación de empresas mixtas. La objeción de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, llevó al TSJ a desdecirse al día siguiente con las sentencias 157 y 158 —contrariando su propia ley—, pero dejó lo referente a la constitución de empresas petroleras mixtas sin que fuese aprobada por la AN.

Finalmente, este empeño llegó al colmo de convocar a una «Asamblea Nacional Constituyente» en contra de lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución y de «elegir» a sus integrantes violando el artículo 63 que especifica que el sufragio se ejerce mediante «votaciones libres, universales, directas y secretas», sino por votación de segundo grado, parte de cuyo padrón electoral era controlado por organismos adscritos al Psv. El procedimiento permitió votar doble por algunos candidatos. Para mayor burla, el CNE inventó una cifra ficticia de votos —de más de 8 millones—, cuando a lo sumo habrían votado entre 2,4 a 3 millones. Hasta la empresa Smartmatic (proveedora de las máquinas de votación) señaló que su análisis arrojaba que al menos un millón de votos fueron añadidos.

A esta Asamblea Constituyente fraudulenta se le ha pretendido atribuir —sin base legal alguna— poderes supraconstitucionales, lo cual significaría que sus potestades estarían por encima de los poderes constituidos, entre los cuales está la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Atribuyéndose tales potestades, este cuerpo convocó las elecciones a gobernadores y luego las de alcaldes, exigiendo, además, que los electos deberían juramentarse ante ella y no ante los organismos legalmente establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Sufragio. Asimismo, conminó al TSJ a allanar la inmunidad del vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, atribución que corresponde exclusivamente al cuerpo legislativo, para poder imputarlo como instigador de la supuesta violencia por parte de jóvenes que protestaban al gobierno. La misma acusación, sin fundamento, conque fue condenado Leopoldo López a más de 13 años de prisión, tres años antes. Es decir, la ANC fraudulenta es un órgano para el ejercicio abiertamente arbitrario de un poder dictatorial.

La ideología como impostura

El divorcio con la fundamentación doctrinaria de su pretendido proyecto político y, más aun, con la realidad que supuestamente debía interpretar, resalta la función ideológica que tuvo la retórica comunista para Chávez: constituir una representación sesgada del mundo para legitimar sus aspiraciones de centralizar el poder en sus manos para su usufructo

discrecional. Pero la puesta en escena de tal legitimación fue «halada por los cabellos», al sustituir la dinámica de acumulación de una economía rentista por categorías propias de un capitalismo clásico, de proletarios enfrentados a capitalistas explotadores, imaginario con poca sintonía con la Venezuela de hoy. Muerto el gran taumaturgo que fue Chávez y reducidos drásticamente los ingresos petroleros que sostenían el reparto «socialista», Maduro intentó seguir sacando provecho del mismo discurso, pero perdió rápidamente credibilidad y apoyo. Y no podía ser de otra forma si se toma en cuenta que, a pesar de los intentos de imponer una hegemonía comunicacional a través de la censura, la compra o confiscación de emisoras y periódicos, y con el acoso a medios independientes, el gobierno no tiene cómo evitar que informaciones desfavorables lleguen al conocimiento de los venezolanos. La proliferación de canales abiertos por el avance de las TICs (tecnologías de información y comunicación) para acceder a información de todo tipo hace impensable hoy la imposición de un pensamiento único como el que sirvió de baluarte a las tergiversaciones con que Stalin y sus secuaces de los estados satélites embaucaban a poblaciones enteras para afianzar sus despotismos. La falsa realidad construida con base en la técnica Goebbelsiana de mentir reiteradamente, lejos de generarle apoyo a Maduro, provocó creciente rechazo hacia su persona y a su gestión de gobierno, sobre todo en la medida en que la situación de la economía empeoraba visiblemente.

Cambia entonces la función de la ideología. Ya no cumple el papel de ideario legitimador ante las masas de un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder. Pasa ahora a servir como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. El chavismo deja de ser un proyecto capaz de cautivar a vastas capas de la sociedad para movilizarlas en batalla contra fuerzas «contrarrevolucionarias», como fue, en parte, en sus comienzos, y se transforma abiertamente en una secta de fanáticos, que usan las categorías de la retórica comunista como «verdades reveladas» para prescindir de toda necesidad de entender la realidad tal cual es y poder «justificar» sus ejecutorias. Se invoca el compromiso monástico, refractario a toda contrastación empírica, a que se refería Louis Fischer con relación al Pcus (Partido Comunista de la Unión Soviética) de los primeros años. La ideología se orienta ahora a fomentar un espíritu de cuerpo y a forjar un sentido de pertenencia a una causa trascendental personificada en Chávez. De ahí el culto a su persona y el afán de mantener viva su memoria con todo tipo de invocaciones, uso de simbolismos maniqueos y clichés. El campo de influencia del chavismo requiere hoy para su sobrevivencia de lo mágico-religioso.

Emerge así una construcción valorativa cerrada sobre sí misma, blindada contra toda increpación externa, que da cobijo y seguridad a quienes militan en las filas oficialistas. Y como señalaba Koestler con relación al bolchevismo, la veracidad de los hechos pasa a un segundo plano ante la funcionalidad del discurso para con los intereses del chavismo. De

ahí tanto disparate, sin el más mínimo sentido del ridículo, en los discursos de Maduro y de sus ministros. Pero el contraste con la revolución rusa es notorio: ahí la militancia abrazaba este escamoteo de la realidad con mística, imbuida de convicción y fe en cuanto a que la Historia habría de condonar los atropellos que podían cometerse porque «el fin justifica los medios».

Es difícil creer en la presencia de un «espíritu bolchevique» entre los oficialistas de hoy. Entre los jerarcas que ocupan posiciones de poder, es vergonzoso el enorme cinismo con que repiten clichés para inculpar a la oposición de sus desafueros. La importancia de la ideología no reside en que Cabello, Maduro, Padrino López, El Aissami y su gente la crean —obviamente no es el caso— sino porque sirve de referencia o de señuelo para bloquear toda reprensión a sus actuaciones que pueda hacer dudar a los partidarios y conminarlos a cerrar filas en torno suyo para compartir el usufructo, sin cortapisas, de una Venezuela que proyectan como propia. La lealtad así planteada no es un asunto de mística: se asemeja más a la que prevalecía en la mafia clásica, con sus códigos y juramentos de obediencia (Omertá) para la depredación excluyente de zonas consideradas su particular coto de caza.

La eficacia de esta acometida ideológica entre los partidarios, se alimenta de la ignorancia. La ideología sirve deliberadamente para obnubilar la capacidad de discernimiento de aquellos a quienes va dirigida, cual «falsa conciencia» (Marx *dixit*). La convicción ideológica, en este plano de fanatismo militante, exige ejercer una forma de autocensura que filtre o ni siquiera considere informaciones adversas. Se leen solo determinados diarios, se ven o se sintonizan solo emisoras oficiales y no se acude sino a eventos promovidos por el gobierno. Y ella se asume disciplinadamente gracias a la afiliación afectiva con el régimen y la aversión visceral a toda fuerza que pretenda su reemplazo, inculcada por las campañas de odio y las representaciones maniqueas en las cuales un «nosotros» (los buenos) entabla —en defensa propia— batalla contra los «otros» (los malos), quienes amenazan las conquistas del pueblo. De esta manera, aun no creyendo los simplismos que profesan, muchos militantes logran blindarse y aislarse de la dura realidad que contraría sus pretensiones de dominio sostenido. El mundo ficticio así construido es un refugio necesario para evadir el mundo circundante y no tener que enfrentar sus propios atropellos.

La ideología como arma de guerra

La arremetida ideológica en tales circunstancias sirve para soliviantar las pasiones más primitivas en defensa de espacios que han tomado como suyos. Apela a sentimientos atávicos de clan o de tribu que refuerzan lazos afectivos y de pertenencia en torno a valores o tótems constituyentes, para cerrar filas en resguardo de un designio compartido. Y en esto la mescolanza ideológica muestra ser ventajosa, pues ofrece referentes diversos a partir de los cuales colgar cada quien sus respectivos afectos. La necesaria uniformación de un

espíritu de cuerpo «para el combate» se forja a partir de la identificación del «enemigo» que los une en su contra: en este caso, la porción ampliamente mayoritaria de la población que exige respetar los procedimientos constitucionales para sacar del poder a quien seguramente quedará registrado como el peor presidente de toda la historia del país. Mientras más se la vitupera con odios e insultos de todo tipo, más se afianza este alistamiento de fanáticos en defensa del gobierno. El símil que se proyecta sería el de una fortaleza sitiada que requiere de la presteza militante de sus moradores para evitar que caiga en manos ajenas.

A pesar de atrincherarse en nociones tribales para deslindar campos de batalla, la retórica encuentra útil recostarse también de clichés comunistas, pues invoca la supuesta supremacía moral de quienes luchan por el pueblo trabajador y en contra de sus «explotadores». Sin embargo, como las tantas veces citada referencia de Marx en su prólogo al 18 Brumario de Luis Bonaparte, la historia discurre primero como tragedia para repetirse luego como comedia. La retórica comunista del chavismo, lejos de acerar la disciplina de un partido con mística, dispuesto a sacrificarse por la utopía marxiana, pasa a servir simplemente para alimentar odios arrabaleros en contra de quienes, por oponerse al «proceso», son señalados como culpables de que el pueblo no viva mejor y como amenaza a enfrentar por querer reinstalar reglas de juego que restringirían drásticamente sus «conquistas», *vg.*, la libertad de continuar expoliando al país. Ayuda a empoderar bandas fascistas –los colectivos– para amedrentar a las fuerzas democráticas, delinquir y disputarle a la policía y a la fuerza armada el monopolio de los medios de violencia. La impunidad de no tener instituciones de un Estado de Derecho para reprimirlos y la anuencia de las más altas esferas de gobierno para con sus fechorías –a cuenta de que están con la «revolución»–, afianza en ellos la idea de ser dueños de un coto, igual que una mafia.

La banalidad del mal

En la medida en que desde el poder se tensan los tambores de guerra, el arma ideológica se degrada hasta convertirse simplemente en una representación maniquea de buenos contra malos que trastorna adrede toda relación con la realidad. Al reducirse solo a una referencia para deslindar el campo de batalla, pierde toda capacidad de competir frente a otras interpretaciones del acontecer político y social en una contienda libre y abierta. Pero mientras más se empobrece la carga ideológica, más se sienten requeridos de abrazarla quienes ven amenazado su poder. No es que los cínicos crean las falsedades que vociferan para alimentar sus arengas pendencieras, sino que estas permiten obviar todo apego moral y ético que pudiera interponerse a sus designios. En fin de cuentas, lo que proyectan es un escenario de guerra, donde todo se vale: el engaño, los montajes para inculpar a inocentes, la mentira, juicios prefabricados, la represión despiadada y otras formas de terrorismo de

Estado. La retórica comunista va en su auxilio ya que se inscribe en una teleología justiciera en la que *el fin siempre justificará los medios*, lo cual les otorga ese sentido de superioridad moral comentado arriba. Para quienes se han apretrechado detrás de la fuerza desnuda para defender, «rodilla en tierra», sus dineros y trenes de vida mal habidos, la ideología opera como un bálsamo que acalla conciencias y absuelve los atropellos cometidos en resguardo de sus privilegios. Y no podía ser de otra forma, pues de ninguna manera pueden justificarse sus fortunas y las decisiones tomadas en su defensa, violatorias de los derechos humanos, una vez que se logre el cambio de gobierno. Dicho de otra forma, su «costo de salida» del poder es excesivamente alto, por lo que cualquier cosa que pueda relativizar sus desmanes alivia la carga de tener que enfrentar a un pueblo que los desprecia por corruptos e inhumanos, y por las penurias que les ha causado. El refugio de engañarse a sí mismo puede ser tentador en estos casos extremos. Y esto es, actualmente, la función más importante de la ideología fascio-comunista con que se cobija la actual oligarquía; la capacidad de aislarla completamente del acontecer real para sustituir este con un conjunto de referentes simbólicos que legitiman sus desmanes.

Se desemboca así en la famosa pero polémica figura de la «banalidad del mal» con que Hannah Arendt (2004) quiso entender las monstruosidades a que puede llegar un ser humano como el nazi Adolph Eichmann quien, en otro contexto, podría haber pasado por un apacible vecino. Es la sujeción a un mal absoluto construido a partir de representaciones maniqueas que, a base de cebar temores ancestrales y alimentar fanatismos, niegan la condición humana de aquellos que son estigmatizados por ser diferentes. Estos, al amenazar supuestamente las tradiciones y costumbres del «pueblo», se convierten en enemigos que ponen en peligro el tejido social. Esta representación sensibiliza las pasiones y disuelve toda referencia moral sobre lo que es correcto y lo que no debe hacerse, pues no se trata de semejantes, con los que puede haber empatía, sino de seres repudiables que pueden descartarse en aras de un bien común etéreo, pero «nuestro». El criterio para valorar moralmente las acciones a tomar es —como se vio al comienzo de este escrito— su funcionalidad para con los fines trascendentes de la «revolución». El costo humano y social de que los venezolanos pasen hambre y se mueran por no conseguir los medicamentos adecuados, que sufran la humillación de interminables colas para poder comprar bienes subsidiados, que queden a merced de funcionarios inescrupulosos —Guardia Nacional u otros— que les atropellan y confiscan sus bienes, y la inseguridad reinante a cuenta del empoderamiento implícito de la delincuencia como aliada del poder, son desestimados por el discurso oficial porque se trata de defender la «revolución» contra la (supuesta) agresión

externa y de sus lacayos en el país.²⁵ De modo que, con blindajes ideológicos a partir de imaginarios variados, se amparan niveles inusitados de crueldad. Para facilitar esta acometida, se esconden las cifras que debe publicar el Banco Central, el INE y el Ministerio de la Salud, sobre la realidad del país.

Para el fascismo –invirtiendo el famoso dictamen de Clausewitz– la política es una guerra conducida por otros medios. Por tanto, pierde pertinencia suponer criterios de racionalidad para comprender las ejecutorias de un régimen como el que encabezan Maduro y los militares cómplices, cuando su sobrevivencia en el poder está en peligro. Los disparates que, cada vez más, caracterizan la retórica oficialista, y la desvergüenza con que integrantes del Tribunal Supremo dictan las sentencias más absurdas y apartadas de la ley para favorecer intereses o a personeros del régimen solo pueden explicarse dentro de esta concepción de la política como una guerra. La dinámica o, si se quiere, la «racionalidad irracional» que emerge, es el resultado de la excitación de pasiones viscerales y la exacerbación de resentimientos, instrumentos centrales a la motivación clásica con que el fascismo moviliza a sus partidarios para el combate. Como resultado, se afianza un imaginario que, aunque difuso y poco realista, disuelve, con exclamaciones autocomplacientes que responsabilizan a otros de sus maldades, toda crítica a sus actuaciones. Los recluye en una especie de matriz materna de referentes moralistas reconfortantes –porque se derivan de la teleología justiciera «socialista»– ante un entorno adverso. Ello absuelve al «revolucionario», imbuido siempre del consuelo de poseer la verdad y, por ende, la razón de la Historia y la supremacía moral.

Conclusiones

La obcecación mostrada por Maduro y su equipo por mantener sus actuales políticas y aferrarse al poder no se compadece con la necesidad urgente de encontrarle salidas a la tragedia que agobia a la familia venezolana. El nivel de crispación social y política ante su pésima gestión y el rechazo mayoritario de la población a su gobierno deberían interpretarse como señales claras de la necesidad de aprovechar los mecanismos dispuestos en la Constitución para restablecer la gobernabilidad. El sabotaje por parte del oficialismo a estas opciones y la insensibilidad de Maduro ante los reclamos de cambio causan consternación, pues evidencian que su gobierno responde a prioridades bastante alejadas de los intereses de la Nación en estos momentos. Esta contrariedad merece ser explicada.

²⁵ Cabe señalar que las penurias económicas por las que atraviesa la población no obedecen a ninguna fatalidad, ni son consecuencia de la caída en los precios internacionales del petróleo. Mucho menos, de ese invento de «guerra económica» con el que el gobierno insiste –infructuosamente– en evadir su responsabilidad en esta tragedia. Véase, la Carta Abierta al presidente Maduro, firmada por más de 100 economistas: [http://elestimulo.com/elinteres/economistas-y-academicos-piden-a-maduro-romper-con-la-economia-de-controles/](http://elestimulo.com/elinteres/economistas-y-academicos-piden-a-maduro-romper-con-la-economia-de-contrroles/)

En lugar destacado se encuentra la defensa de los intereses creados en torno a un sistema de expropiación basado en controles de todo tipo y en la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Ello confiere gran discrecionalidad a los funcionarios encargados de tomar decisiones y hacerlas cumplir, lo cual genera oportunidades inusitadas de lucro. Como lo atestiguan los numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz pública, quedan pocas dudas de que el excesivo intervencionismo del Estado y el manejo opaco, personalista y centralizado de la renta petrolera, han redundado en un ambiente muy favorable a que estas prácticas proliferen. Ha surgido así una nueva oligarquía, atrincherada en los nodos decisivos del Estado para aprovechar al máximo estos mecanismos: el Estado Patrimonialista a que se refería Max Weber. Aun así, sorprende su nula disposición a buscar acuerdos que le permitan mejorar su base de apoyo y neutralizar las críticas a su gestión. Por el contrario, la oligarquía ha arreciado la represión y respondido con virulencia a toda crítica de la oposición, cerrando las posibilidades de entendimiento con ella en torno a la búsqueda de salidas al conflicto. Tal comportamiento parece contrariar un manejo político racional de la situación que enfrenta por parte del gobierno, ya que es notoria su condición de minoría. Las razones de ello estarían en la ideología, que explicaría, además, la inusual crueldad que exhibe el gobierno al no rectificar sus políticas, manteniendo su postura a pesar del terrible padecimiento que causa a la población.

Alegando estar conduciendo un proceso revolucionario, Chávez invocó la gesta emancipadora como inspiración de su gobierno, dibujando una construcción ideológica patrioter que discriminaba a los que disientían de sus propuestas. A partir de 2004, empero, encontró de gran utilidad arroparse también con los elementos del imaginario comunista, anunciando que su propósito era la construcción del «socialismo del siglo XXI». Esta mudanza permitió abreviar en una larga y rica tradición de luchas por la justicia social, recogida en categorías discursivas tentadoras para la dirigencia chavista, algunos de cuyos integrantes habían sido protagonistas de episodios insurreccionales de izquierda en los años 60 y 70. La idea socialista encontraba importante asidero, además, en las prácticas estatistas de gobiernos adecos y copeyanos. Sin requerir una mayor precisión sobre su significado, la población entendió la prédica socialista de Chávez como la lógica profundización de tales acciones intervencionistas de manera que produjeran —ahora con la determinación de un líder revolucionario y sin las ataduras de una democracia «hueca»— las promesas incumplidas por gobiernos anteriores. Por último, la adopción del discurso comunista permitió profundizar el imaginario maniqueo tan central a la prédica chavista, según la cual el pueblo —definido siempre como los partidarios del régimen— se estaría enfrentando a la burguesía y a la democracia liberal, traidora de la Patria. Le dotó, además, de una mitología

revolucionaria que alimentaban una pretendida supremacía moral sobre la oposición por ser esta de «derecha», aliada al imperialismo yanqui.

El carácter doctrinario y cerrado sobre sí misma de la prédica comunista, inexpugnable a toda crítica externa, reforzó deliberadamente la cultura de secta entre las filas oficialistas. Contribuyó a construir esa falsa realidad con que todo movimiento fascista justifica sus acciones, legitimadas siempre por el fin superior buscado. Pero al chavismo le fue imposible trasplantar la mística reinante en la militancia bolchevique o la propagada en torno a la gesta de Fidel en la Sierra Maestra, ejemplos cuya inspiración hubiese ayudado a afianzar el compromiso de los partidarios en torno a «su» gobierno. En su lugar, se alimentó un fanatismo basado en otros factores, fundamentalmente en el sentido de pertenencia a un proyecto que, a su vez, se autoproclamaba dueño legítimo y exclusivo de los destinos de Venezuela por ser los auténticos herederos de Bolívar. Tal identificación implicaba, necesariamente, el enfrentamiento y la exclusión de quienes no comulgaban con la prédica redentora de Chávez y que, por tanto, ocuparían la posición de enemigos. Esta confrontación con las fuerzas opositoras se nutrió de campañas de odio, la represión selectiva contra algunos de sus personeros y con su discriminación activa desde el Estado, todo lo cual fue facilitado por el desmantelamiento de las instituciones que resguardan los derechos humanos y, en particular, de la libertad de opinión y comunicación.

El sentido de pertenencia y de ser propietario del país pudo complementarse provechosamente —para los propósitos del chavismo— gracias a la disponibilidad de abundantes ingresos, en virtud del aumento de los precios internacionales del crudo a cerca de los 100 dólares el barril. El reparto discrecional de la renta a través de misiones y de otros mecanismos, y la veta que fue abriéndose para todo tipo de negociados con base en estos recursos, apuntaló la idea de un proyecto excluyente, reservado a quienes compartían el sueño «socialista» que se propagaba como fin de la «revolución». El hecho de que muchos quedaran por fuera no lo desmerecía por sectario porque, conforme al imaginario chavista, la categoría de «pueblo» se construía a partir de la afinidad con el proyecto bolivariano. Más bien desmerecía a quienes no lo hacían suyo, ya que se habían «auto-excluido» al colocarse del lado equivocado de la Historia. Bajo la consigna de «Ahora Pdvsa es de todos» que se popularizó luego de la expulsión de casi la mitad de los empleados de la empresa por haber participado en el paro nacional de diciembre 2002 a enero 2003, el chavismo se fue apropiando, por diversas vías, del producto petrolero. Esta apropiación, por lógica, implicaba la exclusión de quienes no fuesen chavistas, objetivo que se prosiguió desde los comandos de la «revolución».

El sistema de controles y regulaciones de todo tipo, y el intervencionismo discrecional del Ejecutivo en materia económica, sin rendir cuentas y ocultando información sobre sus efectos, en un marco institucional minado y sin garantías, generó enormes incentivos

para la corrupción. Los dineros mal habidos de origen público descubiertos en cuentas bancarias externas en las que se han depositado magnitudes millonarias atestiguan la conformación de una nueva oligarquía que se ha apoderado del Estado para expoliar las riquezas del país. En la medida en que ha tenido éxito desmontando las garantías y contrapesos de nuestro ordenamiento jurídico, los recursos públicos son manejados como si fueran privativos —privados— de una porción minoritaria de la sociedad. Paradójicamente, la prédica socialista ha servido para la privatización, en manos del chavismo, de los bienes públicos. Y aquí la ideología comunista ofrece un aporte invalorable, ya que justifica entre los creyentes el abatimiento de los mecanismos objetivos e impersonales de asignar recursos y de adquirir bienes y servicios a través de las transacciones de mercados en competencia. Vilipendiado el mercado por capitalista, queda libre la asignación y usufructo de los recursos con base en criterios estrechamente vinculados al ejercicio del poder. Y la supuesta superioridad de la planificación, propio del ideario socialista, justificaría formas diversas de intervención discrecional del Estado.

La polarización expresamente perseguida por la cúpula chavista, su negativa a todo entendimiento con las fuerzas de oposición hasta el punto de violar abiertamente el equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos señalados en la Constitución, se convierte, por ende, en salvaguarda de intereses constituidos en torno a ese Estado patrimonialista. Conforme al discurso oficial, los opositores buscan desestabilizar al país y, en este sentido, serían terroristas. La mezcla ideológica de que se ha valido el chavismo, combinando un patriotismo simplón con la mitología comunista, se enfila a provocar un clima de confrontación, de «guerra conducida por otros medios», que galvaniza a los partidarios en torno al gobierno. En este sentido, la ideología deja de servir como representación particular de la realidad, capaz de disputarles a otros imaginarios su hegemonía sobre la sociedad, para convertirse en instrumento para amalgamar a sus partidarios contra el «enemigo».

La generación de fanatismos para forjar un espíritu de secta, dispuesta a defenderse con cualquier medio a su disposición contra la amenaza ajena, es la quintaesencia del fascismo. Se vale de la construcción de una falsa realidad que da seguridad y cobijo a sus militantes y sirve como un bálsamo que alivia toda culpa relacionada con las medidas emprendidas —que pueden ser sumamente crueles— porque encuentran su legitimidad en los fines trascendentes perseguidos. Cual matriz maternal, el chavismo se refugia en la ideología para aislarse de la realidad. Crea un mundo ficticio en el que los criterios sobre el bien y el mal, lo que es lícito hacer y lo que está mal visto, van a depender de los dictados de un liderazgo arbitrario, atento solo a cómo ampliar y preservar su poder. Es notable el cinismo mostrado a diario por quienes comandan verdaderas mafias que han esquilmo las arcas del Estado, para anunciarse como defensores de la revolución y del pueblo, y acusar

a la oposición de atentar contra el orden establecido y de desestabilizar al país a cuenta de su supuesta subordinación a «intereses imperialistas». En ello incurren, desvergonzadamente, en los disparates más insólitos, como aquel de la «guerra económica» que, aunque de escasa credibilidad, es un grito de batalla entre fanáticos para cerrar filas en defensa del régimen de explotación. El chavismo está obligado a abrazar las construcciones ideológicas que se ha fabricado, no porque sean verosímiles, sino porque galvaniza a los suyos y lo resguarda de las terribles implicaciones de sus acciones. La verdad se relativiza en un imaginario etéreo cuyos referentes «morales» están sujetos a su pertinencia para con la preservación y ampliación del poder. Llega hasta el punto de confundirse deliberadamente lo que es cierto con lo que es inventado, alimentando mentes enfermizas que no tienen recato alguno para constituirse en verdugos de su pueblo. Sin este aislamiento no podría explicarse la insensibilidad ante la tragedia de los venezolanos, la crueldad con que son despreciados sus reclamos por una rectificación de políticas y la virulencia e intemperancia mostrada en su defensa del poder.

La construcción ideológica comentada ha tenido un destinatario particular en los militares. Su eclecticismo permite insuflar sentimientos patriotericos con referencias idealizadas al papel del Ejército Libertador, a la vez que busca limpiarles la cara imbuyéndoles de la creencia de que no son los típicos miliares gorilas del pasado reciente latinoamericano, prestos a ocupar el poder en respuesta a tales inflammas, sino militares «revolucionarios», defensores del pueblo y con gran sensibilidad social. Revirtiendo décadas de lucha contra dictaduras militares, en defensa de la democracia y por el respeto a los derechos humanos, se justifica ahora sus atropellos desde una retórica de «izquierda» a cuenta de constituir el sostén principal de un gobierno que se autoproclama «revolucionario».

Lamentablemente, la influencia de este tipo de argumentaciones tuvo gran calado por la primacía dada a los militares dentro de la historia patria, incluso bajo gobiernos democráticos. El hecho de que ahora ese pueblo del que alegan ser defensores está enfrentado resueltamente a este gobierno debería provocar fisuras en ese blindaje. De ahí la importancia crucial para el Madurismo de convertir a la cúpula militar en cómplice de sus desmanes, poniéndolos al frente de actividades de distribución de alimentos, como custodio de las transacciones trasfronterizas, regulador del transporte de carga, administradores de las concesiones mineras y garante del cumplimiento de regulaciones y leyes punitivas, todo lo cual le abre un inmenso y prolífico horizonte para la extorsión. Esta complicidad y su disposición a prestarse para el rol de represores, tan recurrente en la tradición gorila del militarismo latinoamericano, los sitúa hoy entre las instituciones de mayor rechazo según registran las encuestas. ¿Seguirán siendo el baluarte que evitará la salida de Maduro del poder que tanto exige el país?

Referencias bibliográficas

- Arendt, Hannah** (2004). *Eichmann en Jerusalén*, Barcelona, DeBolsillo.
- Conquest, Robert** (1990). *El Gran Terror. Una Reevaluación*, Oxford, Oxford University Press.
- Berlín, Isaiah** (2017). *El sentido de la realidad*, Barcelona, Taurus.
- Debray, Régis** (1967). *Revolution in the Revolution*, New York, Monthly Review Press.
- Djilas, Milovan** (1957). *The New Class. An Analysis of the Communist System*, London, Thames and Hudson.
- Eco, Umberto** (1995). «Eternal Fascism: Fourteen Ways of Looking at a Blackshirt», *New York Review of Books*, 22 de junio, 1995.
- García L., Humberto** (2009). *El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías*, Caracas, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate.
- García L. Humberto** (2016). «The Patrimonial State under Venezuela's Twenty-first Century Socialism», en, *Venezuela: Social, Economic and Environmental Issues*, Nova Science Publishers.
- González Fabre, Raúl** s.j. (2015), *La cultura pública en Venezuela*, Temas de Formación Sociopolítica # 43, Caracas, Centro Gumilla – UCAB.
- Judt, Tony** (2013). *Pensando el Siglo XX*, con Timothy Snyder, Madrid, Prisa Ediciones, Santillana.
- Koestler, A.** et al. (1949). *The God That Failed*, Harper Colophon Books, New York, Harper & Row Publishers.
- Lenin, V. I.** (1965). *What is to be Done*, Moscow, Progress Publishers.
- Marx, Karl** (1972). *Critique of the Gotha Programme*, Progress Publishers, Moscow.
- Marx, Karl** (1972). *18 Brumario de Luis Bonaparte*, Moscu, Editorial Progreso.
- Mazower, Mark** (2001). *La Europa Negra*, Barcelona, Ediciones B.
- Orwell, George** (1984). *1984*, República Dominicana, Editorial Alfa y Omega, .
- Orwell, George** (2003). *Rebelión en la granja*, Barcelona, Colección: Áncora y Delfín.
- Payne, Stanley** (1997). *A History of Fascism 1914-45*, , London and New York, Routledge.
- Popper, Karl** (1962). *La lógica de la investigación científica*. Traducido por Víctor Sánchez de Zavala Madrid, Editorial Tecnos.
- Popper, Karl** (1972). *Miseria del historicismo*, Madrid, Alianza Editorial, El libro de bolsillo.
- Presidencia de la República**, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista –PPS-, 2007-2013
- Ruiz Calderón, Humberto** (1997). «De la idea populista a la práctica tecnocrática», en *Tras el fuego de Prometeo*, Perú.
- Urbaneja, Diego Bautista** (2015). *La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días*, Temas de Formación Sociopolítica, Caracas, UCAB, Centro Gumilla.
- Van Dijk, Teun A.** (2006). *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*, Sevilla, Gedisa editorial.
- Voslensky, Michael** (1980). *La nomenklatura. Los privilegiados en la URSS*, Barcelona, Argos-Vergara.
- Weber, Max** (1978). *Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology*, Berkeley, Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press.